

Estudios agrarios críticos: tierras, semillas, soberanía alimentaria y derechos de las y los campesinos

Marc Edelman



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

338.1
E217

Edelman, Marc

Estudios agrarios críticos: tierras, semillas, soberanía alimentaria y derechos de las
y los campesinos / Marc Edelman. — 1.ª ed. — Quito: Editorial IAEN, 2016
132 p.; 15 x 21 cm

ISBN impreso: 978-9942-950-74-1

ISBN electrónico: 978-9942-950-75-8

1. AGRICULTURA 2. AGRICULTURA CAMPESINA 3. USO DEL SUELO
 4. AGRICULTURA-SEMILLAS 5. AGRICULTURA-ALIMENTOS
 6. SEGURIDAD ALIMENTARIA 7. DERECHOS HUMANOS-CAMPESINOS
- I. Título

Colección editorial: Economía y sociedad n.º 7 

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Centro de Economía y Estudios Estratégicos

Av. Amazonas N37-271 y Villalengua, esq.

Tel.: (593 2) 382 9900

Quito, Ecuador

www.iaen.edu.ec

Información: editorial@iaen.edu.ec

Dirección editorial: Miguel Romero Flores

Coordinación de arbitraje científico: Javier Monroy Díaz

Corrección de estilo: David Chocair Herrera

Diseño de portada e interiores: Gabriel Cisneros Venegas

Asistencia editorial: Cristina Silva Villamar

Impresión: La Oficina. Tel.: (593 2) 241 2004

Tiraje: 300 ejemplares

© IAEN, 2016



CC v-NC-SA

Esta licencia permite compartir, copiar, distribuir,
ejecutar, comunicar públicamente la obra y hacer obras
derivadas.

Índice

Sobre el autor	7
Agradecimiento	11
Introducción	13
Estudios agrarios críticos: una breve aproximación	13

CAPÍTULO PRIMERO

Siete dimensiones del acaparamiento de tierras que todo investigador tendría que tomar en cuenta

Introducción	29
1.1. La coyuntura actual no es nada más que una secuela de todo lo que ha pasado antes	30
1.2. La cuestión de escala	32
1.3. El desplome de los precios de los <i>commodities</i>	34
1.4. El papel de los actores nacionales	35
1.5. Las diversas reacciones “desde abajo”	37
1.6. La financierización de la tierra	39
1.7. El acaparamiento para fines no agrícolas	43
1.8. Conclusión	44

CAPÍTULO SEGUNDO

Semillas y derechos: los orígenes de la certificación y marcos legales contradictorios

Introducción	49
2.1. De bien común a propiedad privada	51
2.2. Formas de selección y los orígenes de la certificación de semillas	54
2.3. La revolución de los híbridos	59
2.4. Regímenes jurídicos internacionales	62
2.5. A manera de conclusión	68

CAPÍTULO TERCERO

Soberanía alimentaria: genealogías olvidadas y futuros desafíos

Introducción	71
3.1. La historia de su origen	71
3.2. ¿Qué tiene de diferente la seguridad alimentaria?	76
3.3. El comercio de larga distancia y el tamaño de la empresa .	79
3.4. Los antojos de los consumidores en una sociedad soberana en alimentación	82
3.5. Conclusión	83

CAPÍTULO CUARTO

El Proyecto de Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos: historia y perspectivas

Introducción	89
4.1. Vernacularización-al-revés.....	90
4.2. Los antecedentes	91
4.3. La crisis alimentaria de 2008 y la Declaración de los Pueblos Indígenas	94
4.4. La evolución de los debates.....	97
4.5. “Leyes blandas”, los retos de la implementación y perspectivas futuras	100
4.6. A manera de conclusión.....	105
Bibliografía	109

Sobre el autor

MARC EDELMAN, estadounidense, recibió el doctorado en antropología de la Universidad de Columbia (Nueva York) en 1985. Entre 1985 y 1987 fue director de investigación del North American Congress on Latin America (NACLA), una institución independiente de investigación y de divulgación sobre la realidad latinoamericana y la política exterior de los Estados Unidos. De 1987 a 1994 trabajó en el Departamento de Antropología de la Universidad de Yale y desde 1994 es profesor de Hunter College y del Programa Doctoral en Antropología, ambos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). También ha sido profesor o investigador visitante en las universidades de Fordham, Princeton, Columbia, Illinois, Wageningen (Holanda), Tashkent (Uzbekistán), Costa Rica, del Cauca (Colombia).

De julio a septiembre de 2016, como becario del Programa Fulbright, con asiento institucional en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), de Ecuador, el profesor Edelman impartió cursos y charlas magistrales sobre estudios agrarios críticos, soberanía alimentaria, derechos campesinos, entre otros temas.

Edelman ha realizado investigaciones en México, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Canadá, Indonesia, y en varios países europeos. Es autor de numerosos artículos en revistas latinoamericanas, europeas y norteamericanas sobre problemas agrarios y de desarrollo. Sus libros incluyen *La lógica del latifundio: las grandes propiedades del noroeste de Costa Rica desde fines del siglo XIX* (1998 - Editorial de la Universidad de Costa Rica [la versión inglesa fue publicada en 1992 por la editorial de la Universidad de Stanford]); *Campesinos contra la globalización: movimientos sociales rurales en Costa Rica* (versión en inglés, Stanford 1999, en castellano Editorial de la Universidad de Costa Rica 2005); *The anthropology of development and globalization: from classical political economy to contemporary neoliberalism* (coeditor, Blackwell, 2005); *Social democracy in the global periphery: origins, challenges, prospects* (coautor, editorial

de la Universidad de Cambridge, 2007); *Transnational agrarian movements confronting globalization* (coeditor, Wiley-Blackwell, 2009); *Global land grabs: history, theory and method* (coeditor, Routledge, 2015); *Critical perspectives on food sovereignty* (coeditor, Routledge, 2016); *Political dynamics of transnational agrarian movements* (coautor, Fernwood Books, Canadá, y Practical Action Publishing, Reino Unido, 2016; versión en castellano de próxima publicación por la Universidad de Zacatecas, México). Actualmente Edelman está investigando el tema de los derechos de los campesinos en el marco del derecho internacional y de las Naciones Unidas.

A mis hijos, Daniel, Benjamín Ariel, Oskar y David, con la esperanza de que ellos vivirán en un mundo más justo y pacífico.

Agradecimiento

En 2016, gracias al Programa Fulbright y a la Comisión Fulbright del Ecuador, tuve la suerte de pasar tres meses productivos como profesor visitante en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Universidad de Posgrado del Estado, en Quito, Ecuador. El pequeño libro que el lector tiene en sus manos reúne cuatro trabajos, escritos originalmente para servir de base de un curso en el IAEN sobre estudios agrarios críticos. Los cuatro ensayos no pretenden cubrir, desde luego, todo lo que pueden abarcar los estudios agrarios críticos. Presentan algunos temas clave —tierras, semillas, soberanía alimentaria y derechos de las y los campesinos— y son, juntos con la introducción, una muestra nada más de los tipos de debates que animan este campo de estudio y acción. Se espera, sin embargo, que sirvan para introducir los estudios agrarios críticos y los debates y la bibliografía relevantes a los diversos públicos que tienen inquietudes por el mundo rural.

Además del Programa Fulbright, varias instituciones apoyaron generosamente las investigaciones cuyas frutas se analizan a continuación: la Fundación Científica Nacional de los Estados Unidos (NSF), la Fundación Wenner-Gren para la Investigación Antropológica, el International Research and Exchanges Board (IREX), la Sociedad Filosófica Americana (APS), y el American Council of Learned Societies (ACLS). En el IAEN, recibí una calurosa bienvenida de los colegas del Centro de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Merecen mención especial el decano del Centro, Jorge Orbe, así como Jeremy Rayner y Marcelo Varela. Agradezco también a los compañeros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPIISA) y del Observatorio del Cambio Rural del Instituto de Estudios Ecuatorianos (OCARU-IEE), quienes poco antes de mi partida del país, organizaron un par de seminarios en los cuales pude discutir algunas de estas ideas con las personas que las están poniendo en práctica en el terreno y en los territorios. Aunque el libro es

pequeño, la lista de otras personas que habría que agradecer es tan larga que de hecho sería imposible recordar y mencionar a todas. Van desde agricultores con los que conversé durante décadas de trabajo de campo en varios continentes hasta estudiantes y colegas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), que siempre han sido una fuente de inspiración e ideas. Sumamente importante también han sido los miembros de mi “colegio invisible”, aquellos colegas de estudios agrarios críticos esparcidos por todo el mundo con que hemos compartido colaboraciones, discusiones y debates, y momentos de tristeza y alegría. Verónica Morales revisó los textos en castellano y gentilmente ofreció correcciones, observaciones y, en el espíritu del libro, ocasionales críticas, las cuales siempre resultaron constructivas. Muchas gracias a todas y a todos.

Introducción

Estudios agrarios críticos: una breve aproximación

EN DÉCADAS RECIENTES han proliferado en el mundo académico y en los movimientos de la sociedad civil una serie de enfoques que cuestionan fuertemente las premisas fundamentales de los paradigmas dominantes. Los estudios críticos del derecho (Boyle, 1994), los estudios críticos del desarrollo (Veltmeyer, 2011), los estudios de ciencia y tecnología (STS, por sus siglas en inglés [Hackett, Amsterdamska, Lynch, & Wajcman, 2008]) y la teoría crítica de la raza (Delgado & Stefancic, 2012), entre varias otras perspectivas, han buscado identificar, analizar y combatir los sesgos, los valores primordiales y las formas de representación y de legitimación del conocimiento, de la sabiduría convencional y, más importante aún, se han dedicado a la tarea de construir y proponer alternativas. Esta pugna entre modelos alternativos de conocimiento y de práctica política ha sido siempre muy desigual, una consecuencia y un reflejo de las estructuras de poder político, económico y mediático. Sin embargo, los enfoques críticos han logrado abrir importantes espacios e incidir en los debates públicos de tal manera que las ideas imperantes ya no parecen incuestionables e inevitables y no gozan del mismo nivel de hegemonía y legitimidad que antes tenían.

El mundo rural y el mundo de los especialistas que lo estudian no han estado exentos de estos procesos de cuestionamiento. El propósito de esta breve introducción es trazar rápidamente la evolución de los estudios agrarios críticos, que es a la vez una tradición de investigación, de pensamiento y de acción política, un campo académico contemporáneo, y una red (o varias redes) que vincula a intelectuales profesionales, agricultores, revistas científicas y medios de comunicación alternativos, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, así como a activistas de los movimientos agrarios, ambientalistas, agroecológicos, alimentarios, feministas, indígenas y de

derechos humanos, entre otros. Los estudios agrarios críticos, entonces, no son un objeto de análisis fácil de abordar como es el caso de muchas otras tradiciones de pensamiento.

Para lograr un análisis cabal de los estudios agrarios críticos, algo que no pretendo hacer aquí, habría que abordar la temática desde varios ángulos, los cuales pueden incluir la sociología del conocimiento, las genealogías intelectuales, el análisis de redes, de las diversas orientaciones ideológicas, y de la heterogeneidad intelectual, política y social de los distintos actores involucrados. En vez de esta revisión exhaustiva, que en todo caso otros han intentado con notable éxito (Bernstein & Byres, 2001; Borrás, 2009, 2016), lo que propongo aquí es nada más que aportar algunos elementos para que el lector pueda apreciar a grandes rasgos cuál ha sido el desenvolvimiento de este campo de estudio y de acción.

El punto de partida obligatorio para nuestra discusión es el auge en las décadas de 1960 y 1970 de lo que se denominaba entonces como los estudios campesinos. En esta época, como remarcó el antropólogo mexicano Arturo Warman, con la guerra en Vietnam, las luchas anticoloniales en África y las guerrillas en varios países de América Latina, “De mil maneras y en circunstancias variadas, los campesinos recobraban su protagonismo social y arrastraban con ellos a los estudios campesinos” (Warman, 1988: 655). Este arrastre tuvo fuertes impactos en la academia en Europa, Norteamérica, América Latina e India, entre otros lugares. En Estados Unidos, desbordó los claustros académicos, con una figura tan destacada como Eric Wolf, para citar solo un ejemplo, autor de *Las guerras campesinas del siglo XX* (1972), desempeñando un papel clave en las reuniones masivas de autoenseñanza colectiva (*teach-ins*) contra la guerra en Vietnam que se llevaron a cabo en cientos de universidades por todo el país (Roseberry, 1995).

Los estudios campesinos fueron nutridos también por el redescubrimiento de la llamada escuela rusa de la organización-producción, cuyo más destacado representante fue el economista A. V. Chayanov, que por sus ideas heterodoxas acerca de la diferenciación del campesinado cayó víctima de las purgas estalinianas de la década de 1930 (Shanin, 2009). La traducción de las obras de Chayanov, primero al

inglés (1966) y luego al español (1974) y otros idiomas, causó un gran revuelo en Norteamérica, Europa y América Latina, inclusive entre los marxistas ortodoxos. Uno de ellos, el antropólogo mexicano Roger Bartra, resumió el pensamiento prevaleciente de este grupo cuando comentó que:

No debe extrañarnos que los bolcheviques hayan producido la mejor teoría sobre la descomposición de la economía campesina y que los populistas [es decir, Chayanov y sus colaboradores] hayan creado las mejores interpretaciones sobre su estructura interna (Bartra, 1975).

Teodor Shanin —sociólogo nacido en Letonia cuando esta formó parte de Polonia, criado en la Unión Soviética, inmigrante primero en Israel y luego en Inglaterra, y actualmente el director y fundador de la Escuela de Moscú de Ciencias Económicas y Sociales— ha sido tal vez el defensor y difusor más consistente de las ideas de Chayanov (Shanin, 1972). En un ensayo que acompañó la publicación en inglés del libro más importante de Chayanov, Shanin subrayó que “los campesinos, de un pedazo de exótica antropológica, se han pasado al centro de los debates acerca de las cuestiones de mayor trascendencia contemporánea” (1986: 21). Esta apreciación la comparte el sociólogo holandés Jan Douwe van der Ploeg quien recientemente ha publicado “un manifiesto chayanoviano” que insiste en la viabilidad de la economía campesina contemporánea y desarticula los argumentos de los ortodoxos de izquierda y de derecha que pronostican y buscan la desaparición del campesinado (Ploeg, 2015).

Es difícil hacer justicia a la complejidad y riqueza de las ideas de Chayanov y sus colegas en una revisión corta como esta. Sin embargo, se puede señalar algunos de sus planteamientos más importantes. Shanin comenta en una de sus muchas obras sobre el economista ruso que “a Chayanov lo mataron por su teoría de óptimos diferenciales y cooperación vertical” (2009: 85). La idea de que distintas ramas de producción agrícola se caracterizaban por diferentes tamaños de explotación óptimos, una finca de legumbres percederas frente a un monocultivo de trigo, por ejemplo, podría ser hoy parte del sentido común de los agricultores y los estudiosos. Sin embargo, esto constituía una herejía en un contexto en el cual el régimen se

había decidido embarcar en una colectivización de la agricultura basada en granjas estatales y cooperativas de gran escala, fuesen estas productoras de pepinos o de centeno. El concepto de la cooperación vertical de Chayanov surgió de estudios a profundidad y observaciones empíricas de las formas de organización del campesinado ruso en el período después de la revolución de 1905 y en el gran éxito entonces de las cooperativas integradas de producción, mercadeo y servicios, funcionando cada una en una escala diferente y organizadas desde abajo por los propios campesinos y sin ninguna conducción del Estado. Tal como la noción de óptimos diferenciales, este concepto entró en conflicto con el programa oficial de eliminación de la propiedad privada, aun cuando esta era la pequeña parcela campesina o la cooperativa rural de autogestión.

Yo agregaría a este análisis de Shanin que la teoría de Chayanov sobre la diferenciación social en el campo también era aberrante para un régimen que a finales de los años 1920 se había decidido en “la liquidación de los campesinos ricos (*kulaki*) como clase”. Chayanov, basándose en datos de los masivos censos rurales realizados tanto bajo los *tsares* como en los primeros años de la Unión Soviética, sostuvo que las diferencias de clase en la Rusia rural no eran permanentes, sino más bien se debían a un ciclo generacional, en el cual las unidades domésticas jóvenes, con pocos y pequeños hijos que no aportaban mano de obra y que más bien eran costosos, vivían en la pobreza, y las unidades domésticas de más edad, con hijos adolescentes y adultos que sí trabajaban en la empresa familiar, beneficiaban de una acumulación mayor de riqueza. Estos debates sobre la diferenciación rural y la viabilidad de la economía campesina tuvieron fuertes ecos en América Latina durante los años 70, sobre todo en México, cuando “campesinistas” y “descampesinistas” se enzarzaron en amargas polémicas acerca de la posible desaparición o no de los sectores rurales pobres (Feder, 1977, 1978; Hewitt de Alcántara, 1988; Roseberry, 1993).

Los estudios campesinos de los años 60 y 70 debatieron otros temas importantes que siguen teniendo resonancia actualmente, tales como “las economías morales” (Edelman, 2007; Scott, 1976; Thompson, 1971), el carácter feudal o capitalista de los grandes

latifundios y plantaciones de América Latina (Edelman, 1998), y las múltiples definiciones de los términos “campesino” y “campesinado” (Edelman, 2013b). No obstante estos fructíferos intercambios de ideas, ya para principios de los años 80 era claro que los estudios campesinos habían perdido cierto dinamismo.

¿A qué se debió esta merma en las pasiones intelectuales y políticas que habían inspirado varias generaciones de científicos sociales comprometidos? Son varios los elementos que se pueden mencionar. Con el fin de la guerra en Vietnam y de las luchas anticoloniales en África, el campesinado empezó a perder algo de ese protagonismo histórico que era tan evidente en las décadas anteriores. Para empeorar la situación, mientras las luchas campesinas de los 60 y los 70 apuntaron a la conquista del Estado o a la liberación nacional, frecuentemente en los 80 y después, los campesinos comenzaron a participar en guerras depredadoras sobre recursos e inclusive sobre drogas, tales como los brutales conflictos en Sierra Leone, Birmania, Colombia y México, un fenómeno que complejizó la labor de los académicos que abrigaban todas las esperanzas utópicas y el romanticismo sobre el campesinado que les habían entusiasmado por tanto tiempo (Buijtenhuijs, 2000). La rápida urbanización de muchas sociedades en el Sur Global también contribuyó a disminuir el interés de los intelectuales en el mundo rural y en las posibilidades de transformación social que podrían radicar ahí. Y finalmente, la consolidación de proyectos neoliberales en muchos países en los años 80 y a principios de los 90 profundizó la fragmentación de numerosos proyectos políticos colectivos, entre ellos los movimientos campesinos que habían tenido estrechos vínculos con partidos políticos o con los aparatos estatales.

Si bien es cierto que los impactos de los programas de ajuste estructural, las privatizaciones, los recortes de los sectores públicos y las aperturas comerciales afectaron negativamente las zonas rurales, también es el caso que el campo frecuentemente emergió como un foco importante de oposición al modelo neoliberal. En muchos países se formaron nuevos movimientos campesinos que reivindicaron su autonomía frente a los partidos políticos y el Estado y que empezaron a crear coaliciones transnacionales (Edelman & Borras, 2016:

104-105). Estas nuevas alianzas que iban más allá de las fronteras nacionales surgieron primero en América Latina, América del Norte, Europa, y Asia (Edelman, 2003). Aunque los procesos de acercamiento y coordinación a veces eran contradictorios y difíciles, ya para el año 1993 los movimientos campesinos de todos estos continentes lograron conformar una instancia de unidad transnacional que llamaron La Vía Campesina. Dos décadas después La Vía Campesina había crecido a tal magnitud que pudo reclamar la representación de alrededor de doscientos millones de agricultores y el diario *The Guardian*, de Londres, la calificó como “probablemente el movimiento social más grande del mundo” (Provost, 2013).

La Vía Campesina no era de ninguna manera el único movimiento agrario transnacional, pero era indudablemente el más visible y con la mayor capacidad de convocatoria. La organización inició una serie de campañas en contra de la Organización Mundial del Comercio y los tratados regionales de libre comercio y a favor de la reforma agraria redistributiva, la soberanía alimentaria, los derechos humanos de las y los campesinos, y la agroecología, entre muchas otras (Desmairs, 2007; Edelman & Borrás, 2016). Toda esta efervescencia política atrajo el interés de aliados en otros tipos de movimientos —ambientalistas, feministas, indígenas y afrodescendientes, por ejemplo— y también de intelectuales profesionales en las ONG y universidades.

Una vez más los campesinos estaban “arrastrando” a los académicos, dando lugar a un renacimiento de los estudios campesinos, aunque ahora el lenguaje se había modificado y las nuevas generaciones comúnmente optaron por el nombre “estudios agrarios” (y luego “estudios agrarios críticos”). ¿Por qué “estudios agrarios”? En primer lugar, porque los especialistas quisieron reconocer explícitamente algo que, por supuesto, ellos conocían desde siempre: el mundo rural no consistía solo de campesinos, sino de muchos otros sectores, entre ellos grandes terratenientes, trabajadores de plantaciones, pescadores artesanales, pastores nómadas, grupos étnicos, proveedores de servicios, profesionales, comerciantes, transportistas e intermediarios, entre muchos otros. En segundo lugar, una serie de cambios institucionales dieron más prominencia al término “agrario”, sin descartar completamente la palabra “campesino”. En 2001, por ejemplo,

una escisión del consejo editorial de la *Journal of Peasant Studies* resultó en la formación de una nueva revista *Journal of Agrarian Change*, cuyo nombre incluía no solo la palabra “agrario” sino también “cambio”. Ocho años más tarde, en 2009, la misma *Journal of Peasant Studies*, que se fundó a principios de los años 70 durante el auge de los estudios campesinos, cambió de dirección y, aunque mantuviera el título histórico de la revista, se agregó un subtítulo: “Perspectivas críticas sobre la política y el desarrollo rural” (“Critical perspectives on rural politics and development”), acogiendo así la agenda no solo de los estudios agrarios, sino de los estudios agrarios críticos.

Menciono esas revistas porque en varios sentidos eran revistas académicas muy inusuales. Ambas contaban con la participación de equipos multidisciplinarios e internacionales y ambas se inclinaban hacia la izquierda, con miembros de sus respectivos consejos editoriales que eran, aparte de académicos, militantes de movimientos sociales de sus países, pero más significativo aún fueron las instituciones afines y las redes que propiciaron.

La *Journal of Peasant Studies* es tal vez el caso más emblemático y relevante para nuestro análisis. Con un nuevo director que había sido un activista en el movimiento campesino en las Filipinas y luego en La Vía Campesina (todo esto antes de proseguir estudios de posgrado), la revista se volcó hacia temas bastante novedosos, tales como la ola de acaparamiento de tierras que surgió durante la crisis alimentaria de 2007-2008, el auge de los agrocombustibles, la soberanía alimentaria, los movimientos agrarios transnacionales, y los debates entre los partidarios de la reforma agraria redistributiva y los de la reforma agraria por vía del mercado. La revista patrocinó grandes conferencias internacionales sobre estos temas que siempre contaron con la participación no solo de un diverso grupo de académicos comprometidos, sino también de activistas de ONG y de movimientos agrarios. Se creó además una instancia de coordinación que se llamaba Iniciativas en Estudios Agrarios Críticos (ICAS, por sus siglas en inglés) que difundió las ponencias presentadas en las distintas conferencias por internet y las canalizó a la *Journal of Peasant Studies* y otras revistas científicas en inglés y otros idiomas para su publicación final. ICAS también inició una serie de “libros pequeños sobre temas grandes”

por connotados especialistas en cuestiones agrarias que son escritos en un lenguaje no técnico para que puedan estar al alcance de los intelectuales de las organizaciones de base y multilaterales y de las ONG. Con la colaboración de un consorcio de editoriales universitarias y otras instituciones, cada “libro pequeño” se publica en diez idiomas (inglés, español, portugués, italiano, ruso, chino, coreano, japonés, thai y bahasa indonesia). Hasta la fecha se han editado seis libros en la serie (aunque no todos los seis han salido todavía en los diez idiomas).¹

Toda esta actividad frenética, inusual para una revista académica, tuvo otro efecto que vale la pena mencionar. La *Journal of Peasant Studies*, aunque parezca extraño, llegó a tener, ya para el año 2011, el factor de impacto más alto de cualquier revista de ciencias sociales en idioma inglés. El factor de impacto (FI) de una revista es el número de veces que el artículo promedio es citado durante los dos años subsecuentes a su publicación. El alto FI de la *Journal of Peasant Studies* refleja la gran relevancia y el carácter interdisciplinario de muchos de los artículos que ha publicado, además de una cierta clarividencia del equipo editorial respecto a cuáles tópicos iban a ser de más urgencia y actualidad, tales como *land grabbing* (acaparamiento de tierras), *green grabbing* (acaparamiento con fines ambientales) y soberanía alimentaria, entre otros. Los FI, por supuesto, son un indicador muy imperfecto, pero sí sugieren, en este caso, que la *Journal of Peasant Studies* atraía mucha atención, algo que no es nada común entre las revistas académicas, que tienden a ser muy secas y escritas en un lenguaje arcano, rebuscado y de difícil acceso (Edelman, 2014a).

Aunque los cuatro ensayos que constituyen este libro pueden leerse independientemente, según el interés del lector, es preciso señalar que las temáticas de cada uno están estrechamente vinculadas. El primer capítulo intenta examinar el problema del acaparamiento de tierras contemporáneo, sobre todo en la época posterior a la gran crisis financiera y alimentaria de 2008. Plantea que el análisis del presente debe de entender el momento actual como un producto coyuntural de todos los procesos anteriores de lucha social y de las

1 Los libros ya publicados son de Bernstein (2010), McMichael (2013), Ploeg (2015), Scoones (2015), Delgado y Veltmeyer (2016), y Edelman y Borras (2016).

formaciones sociales preexistentes. En este sentido, las metodologías de los estudios agrarios críticos necesariamente incluyen un importante componente histórico, algo evidente también en los otros capítulos. El fenómeno de acaparamiento de tierras trae consigo, aun si es implícito, un concepto de derechos, el derecho a la tierra en primer lugar y también los derechos que son violados en los procesos de despojo, tales como los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la seguridad del individuo. Es necesario recalcar además que las siete dimensiones del acaparamiento de tierras tratadas en el ensayo no son las únicas que merecen análisis. Sharlene Mollett (2016), por ejemplo, ha mantenido en un trabajo reciente muy sugerente que los acaparamientos de tierras casi siempre tienen una fuerte dimensión racial y que el racismo es uno de los mecanismos que las élites emplean para invisibilizar a los grupos subalternos que proponen desplazar.

El segundo capítulo de este libro plantea una serie de preguntas clave relacionadas con las semillas. ¿Cuándo y por qué las semillas, que desde los orígenes de la agricultura se reproducían sin ser apropiadas por intereses privados, empiezan a convertirse en mercancías y a ser objetos de discursos sobre derechos? ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo el significado de la certificación de semillas? Estos procesos arrancan en el siglo XIX, con los primeros esfuerzos de los fitomejoradores de establecer marcas de confianza y de calidad, y aceleran durante las primeras décadas del siglo XX con la revolución de los híbridos. Ya para fines del siglo XX, cuando las semillas genéticamente modificadas ganan cada vez más terreno, la propiedad intelectual y el comercio de las semillas se rigen por una serie de tratados internacionales, cuyas normas son muy contradictorias entre sí. Las semillas son un factor sumamente importante en la preservación de la biodiversidad y en los esfuerzos para frenar el cambio climático. Frente a los monocultivos y al poder cada vez más concentrado de las grandes corporaciones semilleras, en muchas partes del mundo, los movimientos campesinos e indígenas están realizando campañas y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas, el germoplasma de cultivos, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.

La “soberanía alimentaria” es un concepto que en las últimas dos décadas ha inspirado grandes movimientos sociales y que es, sin embargo, bastante ambiguo. El tercer capítulo explora los mitos y los antecedentes históricos de esta idea, las semejanzas y las diferencias entre ella y la seguridad alimentaria, y los retos que enfrentan los activistas y los gobernantes que buscan crear sociedades soberanas en alimentación. Considero que la soberanía alimentaria es a la vez un eslogan, un paradigma, una mezcla de políticas prácticas y una aspiración utópica. El capítulo demuestra que la frase “soberanía alimentaria” no fue un invento de los movimientos agrarios transnacionales, concretamente de La Vía Campesina, en la década de los 90, como suelen afirmar muchos activistas y académicos, sino que más bien originó en un programa oficial del Gobierno mexicano unos diez años antes. Arguyo además que la cuestión de quién es el soberano en la soberanía alimentaria ha sido desatendida por los investigadores y los activistas y que sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos, lo cual dificulta la búsqueda de políticas adecuadas para realizar o avanzar la soberanía alimentaria en un país o territorio determinado.

El cuarto y último capítulo analiza una campaña llevada a cabo desde el año 2001 por La Vía Campesina y otros movimientos agrarios transnacionales y organizaciones de derechos humanos para conseguir que las Naciones Unidas aprueben una Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. El anhelo de un nuevo instrumento de derecho internacional que protegiera a los campesinos cobró fuerza primero en Indonesia, que a mediados de los años 60 había sido escenario de uno de los genocidios más grandes pero menos conocidos del siglo xx y que había golpeado fuertemente al campesinado indonesio. Con el tiempo, a partir de 2001, la propuesta de los movimientos campesinos indonesios ganó el apoyo de La Vía Campesina y, más adelante, de otras redes transnacionales de agricultores, pueblos indígenas, pescadores artesanales, pastores nómadas y trabajadores de plantaciones. El Proyecto de Declaración, que actualmente está siendo debatido en un Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reitera una serie de derechos ya protegidos en otros instrumentos internacionales e insiste también en la

necesidad de reconocer importantes derechos nuevos, tales como el derecho a la tierra y al territorio y el derecho a sembrar, almacenar e intercambiar las semillas que los agricultores guardan y seleccionan de sus cosechas. El capítulo llama la atención a la participación de los sujetos de derechos en la autoría de las normas internacionales que se les aplican a ellos. En este sentido, cuestiona el paradigma dominante en los estudios de derechos humanos, el cual enfatiza la adopción e interpretación por parte de actores locales de normas internacionales, cuyos orígenes se encuentran en las altas esferas de la gobernanza global, un fenómeno frecuentemente llamado “vernaculización”. El caso de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, que en el proceso de redacción ha contado con una notable participación de los mismos agricultores y otros sectores afectados, nos lleva a proponer más bien un nuevo marco, que llamamos “vernaculización-al-revés”, para entender la relación entre la elaboración de leyes internacionales y el uso que los defensores de derechos humanos en el terreno hacen de estas.

Ya me he referido a la cuestión del porqué el término “estudios agrarios” suplantó a “estudios campesinos”. Pero no he analizado lo suficientemente el porqué se añadió el concepto “crítico”. La sabiduría convencional sobre cuestiones agrarias, promovida por poderosas instituciones, tales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, y La Fundación Gates, ha logrado dominar la producción y la difusión de conocimiento sobre cuestiones agrarias, asimismo las discusiones acerca de qué políticas seguir. El acceso a recursos económicos explica parte del éxito y del predominio de estas instituciones, sin embargo hay que reconocer también que han sido muy adeptas en todo lo que se refiere a la comunicación, produciendo informes y páginas web escritos en un lenguaje accesible y ameno, y ejerciendo una influencia enorme sobre la prensa y los otros medios. Contra estos formidables adversarios, la crítica emprendió una batalla desigual. Con el tiempo pudo incidir efectivamente en algunos debates importantes, especialmente aquellos sobre el acaparamiento de tierras y de agua, los agrocombustibles y la necesidad de reformas agrarias redistributivas. No es una exageración decir que logró cambiar los términos de estas discusiones, aunque las políticas dominantes no necesariamente cambiaran mucho.

A grandes rasgos puedo señalar los elementos clave que distinguen las dos perspectivas.

Tal vez la divergencia más fundamental entre las dos visiones tiene que ver con la relación mercado-sociedad. Mientras los defensores de la sabiduría convencional plantean, por ejemplo, que las causas de la pobreza rural radican en la exclusión o el aislamiento del mercado y que las soluciones deben enfatizar una integración más estrecha en el sistema comercial nacional e internacional, la crítica mantiene por su parte, que las raíces de la pobreza se encuentran en el tipo de inserción adversa en los mercados que los sectores pobres padecen. Las políticas, entonces, en vez de promover una mayor vinculación con el mercado, tendrían que centrarse en la transformación de las relaciones sociales de explotación. Para los investigadores académicos, el análisis de las clases sociales, un tema que prácticamente ha desaparecido de las ciencias sociales convencionales (Barker, 2014), es y será fundamental si vamos a entender no solo las relaciones de explotación sino también el comportamiento político de los grupos subalternos. Es importante insistir además, que la intersección entre las relaciones de clase y otras formas de identidad y de opresión —tales como la etnicidad y la raza, el género, la generación, la religión, la región y la nacionalidad— son aspectos indispensables de cualquier análisis de la realidad agraria (Edelman & Borras, 2016: 49-53).

Aunque muchos de los intelectuales que conforman los estudios agrarios críticos no se consideran marxistas y rechazan todos los dogmatismos, considero que el espíritu de esta área de investigación y acción es bien captado por la famosa cita de la carta que Carlos Marx dirigió a Arnold Ruge en 1843, en la cual hizo una llamada para “la *crítica despiadada* de todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer los resultados a los que conduzca como en el de no temerle al conflicto con aquellos que detentan el poder” (Marx, 2014). La exhortación del joven Marx suena muy contemporánea y muy relevante para los estudios agrarios críticos, sobre todo en la insistencia en la importancia de la investigación empírica y también en la voluntad de enfrentar a los poderosos con la verdad. A la luz de esta cita se podría decir que los cuatro pilares de los estudios agrarios críticos contemporáneos han sido: (1) la investigación empírica

y rigurosa; (2) el reconocimiento de que la objetividad en la investigación social no excluye la posibilidad de una toma de posiciones; (3) el análisis basado en la economía política y en el cuestionamiento de la sabiduría convencional; y (4) identificación y una profunda simpatía con los sectores más desprotegidos, y un compromiso con la justicia social y con los actores que creen que un mundo mejor es posible y que un mejor conocimiento de este mundo es imprescindible si vamos a alcanzar esa meta.

CAPÍTULO PRIMERO

**Siete dimensiones del acaparamiento
de tierras que todo investigador
tendría que tomar en cuenta**

Introducción

EN LOS ÚLTIMOS años he tenido la oportunidad de intervenir varias veces en los debates sobre el acaparamiento de tierras y de expresar algunas inquietudes sobre la forma en la que los científicos sociales y los activistas agrarios abordan este amplio problema, que azota tanto a América Latina como a otras diversas regiones del planeta (Edelman, 2013a; Edelman & León, 2014; Edelman, Oya & Borrás, 2013; Hall *et al.*, 2015).

Estas intervenciones han sido motivadas, en parte, por consideraciones derivadas de investigaciones anteriores sobre la tenencia de la tierra y el latifundismo que he desarrollado desde principios de los años 80, primariamente en Costa Rica; por otro lado, también motiva a este trabajo la sensación de que algunos analistas no prestan la suficiente atención a ciertos elementos clave (Edelman, 1998; Edelman & Seligson, 1994); y más concretamente, haber estudiado el fenómeno del acaparamiento de tierras en el período antes de la crisis financiera y alimentaria de 2008 me dejó con una serie de preguntas respecto a algunas interpretaciones, planteamientos y suposiciones metodológicas que impregnaban la creciente literatura sobre el tema, especialmente aquella producida por las ONG, las instituciones financieras internacionales y el mundo académico.

En esta breve revisión, quisiera señalar siete de estas dudas de forma muy sintetizada, no tanto con la intención de resaltar discrepancias, sino más bien con la idea de enriquecer nuestros debates y de enfatizar la necesidad de aceptar la complejidad del fenómeno de acaparamiento como un punto de partida, aun cuando el mismo proceso de investigación e interpretación siempre presupone algunas simplificaciones necesarias de análisis.

¿Cuáles son entonces las siete dimensiones del acaparamiento de tierras que todo investigador tendría que tomar en cuenta? En resumen son:

1. La presencia de los antecedentes históricos en la historia actual;
2. Los problemas de escala;
3. La cuestión de la caída de los precios de los *commodities* en años recientes y el impacto de esta en los llamados *drivers* o motores de acaparamiento;
4. El papel de los actores nacionales;
5. Las diversas reacciones “desde abajo” al acaparamiento de tierras, que van desde la expulsión hasta la incorporación, bajo condiciones adversas, en los proyectos productivos de los acaparadores;
6. Las múltiples y cada vez más complejas dimensiones de la financiarización y el papel de esta en el nuevo contexto de desplome de los precios de los *commodities*;
7. El acaparamiento para fines no agrícolas.

Ahora, vamos a considerar el primer punto.

1.1. La coyuntura actual no es nada más que una secuela de todo lo que ha pasado antes

La crisis económica y alimentaria de 2008 fue una especie de “tormenta perfecta” cuyas causas incluían el estallido de la burbuja de las hipotecas en Estados Unidos, España, Irlanda, Islandia y otros países; una escasez de cereales en los mercados internacionales provocada por fenómenos climáticos en Australia, Ucrania y otras regiones; por la expansión de la industria de los biocombustibles, fuertemente subvencionada en los Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil, entre otros países; por una creciente especulación que afectó a los mercados de casi todos los *commodities*, agrícolas y no agrícolas, incluyendo el petróleo, el oro y otros minerales. Todo esto a su vez dio lugar al alza sin precedentes en los precios de la canasta básica y en numerosos países provocó la aparición de disturbios callejeros y saqueos de supermercados y depósitos. Como es bien sabido los acaparadores de tierras intensificaron sus esfuerzos, a menudo alegando la existencia de una crisis neomalthusiana y señalando la supuesta urgencia de producir más comida por cualquier medio que fuera necesario para las masas hambrientas.

El carácter repentino, imprevisto y dramático de esta crisis financiera y alimentaria contribuyó a que los investigadores, muchas veces, la vieran como un evento *sui generis* y excepcional, tendiendo a tratar el auge del acaparamiento de tierras como un problema puramente coyuntural y a perder de vista las largas trayectorias de los actores en el terreno, de las corporaciones detrás del fenómeno, como también de los procesos anteriores de expulsión y de concentración de la tierra. Atribuyeron una serie de problemas muy graves al acaparamiento pos-2008, tales como la expulsión de comunidades campesinas de sus tierras y la expansión de biocombustibles a costo de la producción de granos básicos. Estas versiones eran acertadas hasta cierto punto, pero tendían a ver —implícitamente por supuesto— el pasado pre-2008 como una época en la que las tragedias originadas por la crisis eran de menor envergadura o aun ausentes.

Obviamente estoy exagerando un poco, sin embargo, Carlos Oya (2013), en una investigación de 176 trabajos académicos que contenían aseveraciones sobre el impacto de *land grabbing* en África subsahariana pos-2008 encontró que ninguno de ellos incluyó datos de referencia anteriores a 2008, lo cual hizo imposible probar de forma rigurosa que los efectos negativos que los autores citaban fueron resultados de procesos recientes de acaparamiento de tierras y no de otros procesos de más larga data. Según Oya, “no hubo ni siquiera un estudio que presentara una evaluación de impacto, junto con datos de referencia anteriores a 2008 y una comparación de las situaciones pre- y pos-2008” (2013: 1541).

Aparte de la ausencia de análisis comparativos de las situaciones anteriores y posteriores a la crisis de 2008, existen otras razones por las que insisto en la importancia de una visión histórica del acaparamiento de tierras. Aquí se resumen algunos argumentos que hemos desarrollado con más detalle en un trabajo sobre Honduras escrito hace un par de años conjuntamente con Andrés León (Edelman & León, 2014). Los espacios rurales en los cuales se están produciendo los “nuevos” acaparamientos pos-2008 rara vez se encuentran realmente vacíos, a pesar de que los acaparadores y los Gobiernos man-tuvieran que se trataba de terrenos baldíos nacionales, “desiertos” o lugares abandonados. Inclusive la supuesta *terra nullius* o “tierra de

nadie” es típicamente producida por procesos anteriores de conflicto social, despojo y desplazamiento. Las formaciones sociales preexistentes en estos espacios siempre se caracterizan por particularidades locales, tales como “formas tradicionales y formales de tenencia sobre la tierra, configuraciones históricas de las relaciones de clase, redes de parentesco, patrones de género y de asentamiento, características ambientales, infraestructura existente o potencialmente existente, políticas públicas, acuerdos y tratados internacionales, así como formas de inserción en los mercados, entre otros elementos” (Edelman & León, 2014: 196). Tanto los grupos sociales arraigados en estos territorios como los Estados que pretenden gobernarlos tienen sus repertorios históricos de contención política, los cuales también pueden influir en la viabilidad (o en el fracaso) de un intento determinado de acaparar tierras. La historia, entonces, es parte de la actualidad y condiciona fuertemente el presente, de ahí la necesidad de tomarla más en cuenta.

1.2. La cuestión de escala

Varias cuestiones de escala surgieron en los análisis sobre *land grabbing* que se publicaron en los años posteriores a la crisis de 2008. En ese período se puso mucho énfasis en la cuantificación del número de hectáreas acaparadas, a tal punto que frecuentemente se minimizó el papel de otros factores importantes, prestándose escasa atención a la calidad de los datos; así las ONG, con el afán de influir en la opinión pública y atraer donaciones, a veces compitieron entre sí para hacer denuncias cada vez más dramáticas sobre las grandes extensiones monopolizadas por empresas que eran casi siempre extranjeras. En este “fetichismo de hectáreas”, propiciado en parte por las grandes bases de datos de Land Matrix y de GRAIN, se perdieron de vista algunos elementos importantes (Edelman, 2013a).

Primero, los acaparamientos más grandes no necesariamente eran asociados con los procesos de despojo y de desplazamiento más violentos y conflictivos, algo que quedó muy claro en el caso hondureño que analizamos con Andrés León (Edelman & León, 2014) y también en el análisis que hizo Schoneveld (2014) sobre el acaparamiento de tierras en África. Este último autor advierte que las concesiones de

tierras más grandes casi siempre son destinadas para explotación forestal y extracción de madera, un uso cuyo impacto en las comunidades circundantes tiende a ser mucho menor de lo que sería en el caso de proyectos agropecuarios o mineros. Al mismo tiempo la inclusión de estas grandes concesiones en las bases de datos de Land Matrix y de GRAIN tiende a sesgar las tendencias globales, aumentando estrepidamente el número total de hectáreas acaparadas. Además, la escala de algunos de los proyectos que figuraban en los primeros informes sobre *land grabbing* era tan exagerada que era poco probable que resultaran y los investigadores raras veces prestaron atención (y todavía prestan poca atención) a las posibles deseconomías de escala que podrían afectar fincas de varios cientos de miles de hectáreas. De hecho, es notorio el colapso de varios de estos megaproyectos, en algunos casos por problemas de financiamiento y en otros por un exceso de ambición por parte de los inversores o por resistencias desde abajo o de sectores de los aparatos estatales.

Segundo, en varias partes del mundo, tales como India y África del Este, los procesos de acaparamiento frecuentemente ocurren mediante una serie de compras y expulsiones de muy pequeñas parcelas, manejadas por corredores o a veces por el Estado, con ambos trabajando al servicio de los compradores finales (Kandel, 2015; Levien, 2013). Este “trabajo de hormigas” no es siempre muy visible o muy rápido, por lo que los investigadores tienen que estar en el terreno para detectarlo y entenderlo, a pesar de que tales procesos hayan generado grandes desplazamientos de población e importantes movimientos de resistencia (Sampat, 2015).

Tercero, considero que tenemos que pensar más en cuestiones de escala, no solo en términos de las extensiones de tierra acaparada, sino también con relación a un conjunto de otros factores. El más significativo de estos es sin duda la escala de los capitales asociados con un proyecto determinado de *land grabbing* (Edelman, 2013a: 488; Edelman *et al.*, 2013: 1527). Esto afecta a su vez, a múltiples otros elementos, entre ellos la durabilidad o fragilidad del proyecto y de las alianzas políticas y financieras detrás de él y el tamaño de los desplazamientos que podría ocasionar. Dado que los acaparadores ahora apuntan al recurso tierra agrícola, como también a bosques, aguas,

minerales, zonas de potencial urbanístico e industrial, sumideros de carbono, etc., los investigadores podríamos pensar más sistemáticamente en las distintas escalas que aplican en estos tipos de casos (métricos cúbicos de agua, por ejemplo, en vez de hectáreas, o el valor de los créditos de carbono secuestrado).

1.3. El desplome de los precios de los *commodities*

Si bien es cierto que el debate sobre el acaparamiento de tierras se inició en un momento cuando los precios de los cereales, del petróleo y de los otros *commodities* subían bruscamente, en el período actual ocurre todo lo contrario. Después de que los precios de la mayoría de los *commodities* agrícolas y no agrícolas alcanzaron su punto máximo en 2012-2013, han experimentado un desplome casi tan dramático como la subida que ocurrió en 2008.

El carácter súbito e imprevisto de la crisis financiera y alimentaria de 2008, al cual ya me referí, condujo a que los investigadores desarrollaran una visión, tal vez un poco simplista de los *drivers* o motores de acaparamiento de tierras. Si los precios de los productos agrícolas eran altos, estos lógicamente actuarían como incentivo para los acaparadores de tierras. El corolario implícito es que los precios bajos les desincentivarían, un hipotético que no tomó en cuenta la complejidad y la variedad de motivos detrás del acaparamiento de tierras.

La ONG GRAIN, que en 2008 fue la primera organización en poner la voz de alerta sobre la nueva ola de *land grabbing* (GRAIN, 2008), emitió un nuevo informe en 2016 en el que sostuvo que en el contexto de la baja en los precios de los *commodities*:

[...] el número de transacciones de tierras sigue creciendo, pero el crecimiento se ha desacelerado desde el año 2012. En particular, varios de los más grandes 'mega proyectos' han colapsado, lo que resulta en una disminución en el número total de hectáreas. El problema, sin embargo, no va a desaparecer (GRAIN, 2016: 4).

Parte del problema, al menos en América Latina, reside en la sobredependencia de muchos países en los ingresos derivados de recursos energéticos y minerales y en el impacto contraintuitivo que la caída de precios ha tenido en ellos. En efecto, a medida que han bajado los precios de los *commodities* y los ingresos de los Gobiernos por

concepto de rentas petroleras, minerales y otras, han surgido dos tendencias preocupantes. Por un lado, los Gobiernos y las empresas aliadas con ellos están intensificando la búsqueda de nuevas fuentes de divisas derivadas de actividades extractivas, tratando de compensar los bajos precios con un incremento en volumen; y por el otro, siguiendo la misma lógica extractiva, están enfatizando cada vez más la producción agrícola de exportación de alto valor agregado, incluyendo los llamados “cultivos flexibles” (Alonso-Fradejas, Liu, Salerno & Xu, 2016), tales como la palma africana, la soya y la caña de azúcar (Hidalgo Pallares y Hurtado Pérez, 2016). Ambas tendencias significan que la presión sobre las tierras de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sigue siendo fuerte aun después del fin del auge de los *commodities*. Además, como se verá más adelante, la desesperación de los Gobiernos y de los inversores por encontrar nuevos flujos de ingresos ha reforzado la importancia del recurso tierra como objeto de especulación financiera.

1.4. El papel de los actores nacionales

En un trabajo escrito en 2013 conjuntamente con Carlos Oya y Jun Borrás (Edelman *et al.*, 2013) intentamos establecer una periodización de la literatura activista y académica sobre *land grabbing*. Propusimos que en la primera etapa, que arranca en 2008 y va hasta más o menos 2012, los investigadores y los activistas estaban tratando de entender un fenómeno insólito y a la vez de documentar, analizar y denunciarlo. A partir de 2012, empieza a aparecer un número significativo de estudios de caso a profundidad y de pequeña escala, los cuales arrojaron nueva luz sobre la gran variedad de procesos y actores involucrados en el acaparamiento de tierras. Si el énfasis en un principio era sobre los acaparadores extranjeros y la “extranjerización” de la tierra, con el tiempo los investigadores se dieron cuenta del papel significativo desempeñado por los acaparadores nacionales. Resultó que estos podrían ser tan nefastos y codiciosos como los extranjeros y que muy a menudo colaboraron con ellos, formando sociedades mixtas, facilitando contactos dentro de los aparatos estatales, suministrando servicios, sirviendo de fachadas “nacionales” para inversores de afuera, y empleando sus conocimientos y capital cultural para acelerar el despojo de tierras, aguas, bosques y otros recursos.

La complejidad de estas relaciones entre actores domésticos y extranjeros es tal, que un informe reciente insiste en la imposibilidad de especificar con certeza la “nacionalidad” de la mayoría de las grandes transacciones de tierras. Señala además la dificultad de distinguir entre los diversos tipos de actores privados y públicos dada la nueva importancia de sociedades público-privadas (Borras *et al.*, 2016: 7). Otro análisis reciente sobre África indica que los proyectos domésticos a menudo son “menos visibles” que los extranjeros ya que los Gobiernos y los medios de comunicación no los monitorean tan de cerca (Schoneveld, 2014).

El hecho de que los nacionales estén involucrados en los acaparamientos de tierras juntos con los extranjeros no debe de sorprendernos, pues este ha sido el caso en toda América Latina y en muchas otras regiones durante al menos 150 años (Edelman, 1998). No obstante, hay dos razones por las que el factor “extranjerización” sigue mereciendo atención. La primera es tal vez obvia y tiene que ver con el auge de nuevas formas corporativas tales como los fondos soberanos de inversión, las sociedades público-privadas y todas las otras entidades que están aprovechando las “oportunidades” que presenta una economía mundial globalizada. Los actores nacionales son una realidad, como hemos insistido, pero esto no quiere decir que la preocupación con la extranjerización de los primeros estudios sobre *land grabbing* sea desacertada, solo que habría que entenderla en términos más complejos y menos blanco y negro (Keene, Walsh-Dilley, Wolford & Geisler, 2015).

La segunda razón es quizá menos obvia pero más interesante y tiene que ver con la construcción discursiva de los acaparadores por parte de los grupos que los están resistiendo. En muchos contextos, el tildar de “extranjero” a un terrateniente es una manera de desprestigiarlo, de quitarle legitimidad y de fomentar resistencias nacionalistas y locales. Y esto puede ocurrir aun cuando el acaparador es ciudadano del mismo país que los que le están resistiendo si él pertenece a un grupo minoritario o es inmigrante nacionalizado, si tiene un apellido raro o si asocia abiertamente con extranjeros. El acaparador más grande y más notorio de Honduras, por ejemplo, Miguel Facussé, fallecido en 2015, era de ascendencia árabe pero provenía de una familia que tenía más de un siglo de presencia en el país. Los

movimientos campesinos, sin embargo, lo consideraban un “turco” y un extranjero y apelaban a sentimientos nacionalistas para movilizar a la población en su contra (Edelman & León, 2014).

1.5. Las diversas reacciones “desde abajo”

En el apartado anterior mencioné la proliferación de estudios de caso, que empezó a aparecer alrededor de 2012 y que nos obligó a reconocer los sumamente diversos y complejos procesos de acaparamiento que acontecían en distintas partes del mundo. Un aspecto que quedó muy claro a partir de entonces fue la variedad de reacciones de los grupos subalternos afectados por el *land grabbing*. Si al principio los investigadores y las ONG dieron por sentado que las grandes transacciones de tierras siempre implicaban desplazamientos masivos de campesinos e indígenas, y que estos resistían lo que les estaba sucediendo, con el tiempo y con la acumulación de más investigaciones de campo se podría apreciar que los efectos en las comunidades afectadas eran mucho más variados y sugestivos que lo que planteaban.

En un análisis publicado el año pasado y escrito por un equipo coordinado por Ruth Hall, (Hall *et al.*, 2015) recalcamos la necesidad de cuestionar algunas suposiciones *a priori* que son muy frecuentes en los estudios agrarios contemporáneos. Estas incluyen la idea de que los acaparamientos de tierras siempre generan resistencias, la noción de que ciertos cultivos como la palma africana, por ejemplo, son siempre promovidos por los grandes terratenientes y que los pequeños agricultores por lo mismo se oponen a ellos, además el concepto de que los pequeños campesinos no pueden existir al lado de las grandes fincas agroindustriales.

Remarcamos, en cambio, que las reacciones de los grupos subalternos registradas empíricamente iban desde la expulsión y la resistencia, por un lado, a la incorporación bajo condiciones adversas en los proyectos de los acaparadores de tierras, por el otro, sea esta como productores por contrato, mano de obra o dueños que alquilan sus parcelas a una empresa. Entre estos dos extremos de expulsión con resistencia e incorporación adversa se notaban otras posibilidades, entre ellas la expulsión sin resistencia, las luchas por

una mejor indemnización por parte de los desplazados, la “exclusión competitiva” cuando los campesinos no logran competir con las empresas grandes, las luchas por mejores términos de incorporación en las empresas, sea como productores por contrato o como trabajadores, e inclusive las campañas de algunas comunidades (o sectores de ellas) que activamente buscan la inserción en nuevas empresas capitalistas y que se movilizan en contra de aquellos que están resistiendo a las grandes transacciones de tierras (Hall *et al.*, 2015: 467, 472).

De la misma manera notamos casos en los cuales los pequeños productores y cooperativistas manifiestan entusiasmo por la siembra de la palma africana, un cultivo que los investigadores y activistas tienden a asociar únicamente con terratenientes grandes y con *land grabbing* pero que para muchos campesinos constituye una fuente de ingresos y empleo, además de un medio de vida importante (Castellanos-Navarrete & Jansen, 2015; Edelman & León, 2014). Para las grandes empresas, la incorporación de campesinos en las cadenas de abastecimiento es una forma de devolver los riesgos de producción y de mercado hacia abajo y de resolver la cuestión acerca de cómo atraer y disciplinar la mano de obra. Es además una manera de extender su control territorial sin tener que entrar en conflictos desgastadores y posiblemente infructuosos por la tierra. Estas situaciones apuntan a lo que llamamos “dilemas políticos difíciles” (Hall *et al.*, 2015: 472-473). En efecto, las reivindicaciones por la justicia laboral no siempre son compatibles con las planteadas por la justicia agraria y estas a la vez podrían ser incompatibles con las reivindicaciones por la biodiversidad y la justicia ambiental.

Las distintas reacciones “desde abajo” al acaparamiento de tierras reflejan todo ese cúmulo de elementos históricos que mencioné en el primer apartado de este trabajo: tradiciones y repertorios de luchas, formas preexistentes de tenencia de la tierra, y aspiraciones e identidades colectivas e individuales. Y aquí se podría subrayar que algunos de estos elementos, por ejemplo los aspectos de género y especialmente de generación, han recibido muy poca atención de parte de los investigadores y deben de estar más presentes en investigaciones futuras.

1.6. La financiarización de la tierra

El término “financiarización” (o “*financialization*” en inglés) se está empleando con más frecuencia para referirse a la influencia del capital financiero en los mercados de tierras y en los agronegocios en general y también para señalar la creciente importancia de las ganancias que se derivan no tanto de la producción agropecuaria sino de mecanismos financieros. Aun después de los estudios pioneros sobre el tema de Fairbairn (2014), Clapp (2014), Knuth (2015) y Sippel *et al.* (2016), tengo la impresión de que no hemos podido hacer más que rasgar la superficie del asunto. Las bases de datos, por ejemplo, que pretenden documentar a los actores y cuantificar la extensión en hectáreas del acaparamiento de tierras, tales como el Land Matrix, generalmente se enfocan en las compañías detrás de los distintos proyectos y prestan poca o ninguna atención a sus fuentes de financiamiento (Borras *et al.*, 2016: 13).

Los investigadores han subrayado la importancia de las alianzas entre la banca internacional y las instituciones multilaterales tales como el Banco Mundial, por un lado, y los acaparadores de tierras, por el otro. Han señalado además el papel que juega la tierra como una protección, cobertura o *hedge* en la diversificación de los portafolios de inversiones de los grandes fondos de pensiones y de otros inversores institucionales e individuales. La diversificación se da también al nivel geográfico ya que los inversores grandes buscan oportunidades en distintos hemisferios y regiones para así minimizar las posibilidades de eventos climáticos negativos (Sippel *et al.*, 2016).

Como es bien sabido, los precios de la tierra no tienden a fluctuar de la misma manera que los precios de los bonos y las acciones, así que al inversor astuto se le aconseja mantener una proporción de su valor neto en forma de propiedades agrícolas. Recientemente han salido algunos estudios de las operaciones de actores específicos, tales como el fondo de pensiones estadounidense TIAA-CREF (una empresa irónicamente sin fines de lucro y de la cual dependen, dicho sea de paso, las posibilidades que yo pueda jubilarme algún día) que tiene fuertes y muy problemáticas inversiones en Brasil (Rede Social, GRAIN, Inter Pares & Solidarity Sweden-Latin America, 2015), Estados Unidos y otros países, y también de una serie de corporaciones

europas que están propiciando el acaparamiento de tierras fuera de la Unión Europea (Borras *et al.*, 2016).

Este último informe advierte que:

Al mirar las cadenas de inversión de las transacciones de tierras, hay diferentes tipos de actores: los negocios gestores del proyecto agrícola; las empresas matrices que (total o parcialmente) son dueñas de la empresa que gestiona el proyecto (que vendría a ser filial o sucursal local); los inversores que invierten dinero en una empresa a cambio de acciones; instituciones financieras que hacen préstamos a un proyecto o una empresa (bancos comerciales, bancos de inversión, bancos de desarrollo multilaterales, fondos de inversión (una categoría que incluye fondos de cobertura o *hedge funds*, fondos de pensiones, y fondos de capital privado [*private equity funds*]); gobiernos que ofrecen la tierra a las empresas que gestionan los proyectos y que permiten que una empresa se inscriba y opere en su país; corredores que faciliten los contratos y la comunicación entre los diferentes actores involucrados; constructores que lleven a cabo trabajos de infraestructura; y los negocios que compran los productos elaborados o procesados por el proyecto (casas comerciales, agroindustrias, minoristas) (Borras *et al.*, 2016: 19).

Para un investigador o inclusive un sofisticado equipo multidisciplinario de investigación, resulta sumamente difícil destapar este complejo entramado de relaciones financieras y comerciales, sobre todo porque las empresas frecuentemente son entidades ficticias o instrumentales, inscritas en paraísos fiscales en los cuales hay poca transparencia y reina la opacidad, y los flujos de préstamos y de beneficios se esconden intencionalmente de la misma manera. Comúnmente las actividades y las personerías jurídicas de las empresas involucradas abarcan varias jurisdicciones, complicando aún más la tarea de descifrar sus estructuras (Cotula & Berger, 2015: 11). Creo que es importante ver este reto y esta complejidad como un indicio de un proceso más amplio, la ascendencia desde los años 80 de un capitalismo caracterizado por un nivel mínimo de regulación y por un fuerte sesgo a favor de los sectores financiero y de bienes raíces a costo de los sectores productivos. A mediados de los años 70 en Estados Unidos, por ejemplo, se cambiaron los reglamentos de los grandes fondos de pensiones públicas, favoreciendo así una diversificación de

sus inversiones más allá de los bonos estatales que habían constituido su fundamento económico hasta ese punto e inyectando grandes sumas de dinero en sectores no tradicionales, primero acciones, luego bienes raíces comerciales y, eventualmente, instrumentos mucho más oscuros y arriesgados. A medida que aumentaron los riesgos, los fondos se vieron obligados primero a diversificarse mucho más y, segundo, a buscar nuevas formas de cobertura (*hedges*).

Hay que entender también las dinámicas fiscales detrás de la nueva ola de acaparamiento de tierras, un tema que los investigadores apenas hemos abordado. Los acaparadores frecuentemente invierten en tierras en el exterior para esconder recursos de la autoridades fiscales de sus países mientras a la vez se benefician de jugosas concesiones fiscales de los gobiernos anfitriones (Geisler, 2015: 244). En los años 80 en los Estados Unidos y en muchos otros países inició una reducción importante en los impuestos sobre plusvalías o ganancias de capital (*capital gains*) y, en menor grado, sobre las ganancias ordinarias de las corporaciones. Estos cambios han beneficiado los sectores financiero y de bienes raíces a costa de otros sectores de la sociedad y otras fracciones de capital. En otras palabras, las nuevas estructuras fiscales tienden a inflar los precios de los bienes raíces y a desinflar la “economía real” de la producción industrial y agropecuaria y de la provisión de servicios. Se prestan también para la proliferación de nuevas modalidades de inversión, tales como los REIT (*Real Estate Investment Trusts*), una especie de fondo inventado en los Estados Unidos y que ahora existe en al menos treinta países. Los REIT invierten en un portafolio de propiedades, cobran altas comisiones de entrada y no pagan impuestos. Por ley tienen que repartir el 90 por ciento de sus ingresos a los socios cada año y son estos los que tributan cualquier impuesto sobre plusvalías. En los últimos 15 años los REIT experimentaron primero una expansión desmesurada y muy recientemente el estallido de una burbuja especulativa. Sin embargo, desde aproximadamente el año 2000 han sido un motor importante del alza en los precios de la tierra y de los bienes raíces en general. Los REIT, tales como los otros inversores institucionales, siempre han estado más interesados en la tierra como un activo en un portafolio diversificado que en el potencial productivo que podría tener. Este

aspecto a su vez contribuye a fomentar la inflación de precios y una mentalidad cortoplacista entre los inversores.

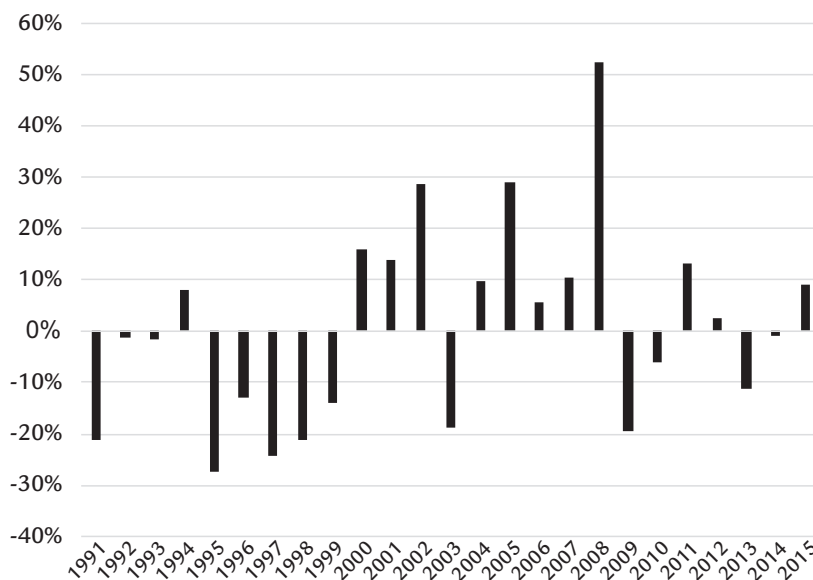
El economista Michael Hudson ofrece algunas observaciones sobre la financiarización que deberían también incitarnos a la reflexión. Según Hudson, aproximadamente el 70 por ciento de los préstamos bancarios en Estados Unidos y el Reino Unido son para bienes raíces urbanos y rurales, y además el 80 por ciento de las plusvalías (*capital gains*) en Estados Unidos derivan de alzas en los precios de tierras (Gunnoe, 2014: 480; Hudson, 2012: 145-146). Él sugiere que estamos presenciando el nacimiento de una nueva etapa de capitalismo, basada en una integración sin precedentes del capital financiero y la posesión de tierras, a la cual él llama “la sociedad neorentista”. A pesar de lo que plantea Knuth (2015), en su excelente análisis de la financiarización, el cortoplacismo y la orientación neorentista no son necesariamente disposiciones opuestas. Los inversores neorentistas y los que administran sus portafolios pueden perfectamente entrar y salir de una serie de proyectos según las posibilidades que estos ofrecen para generar ingresos, manejando simultáneamente inversiones de corto y largo plazo.

Se puede apreciar una parte de la lógica de “la sociedad neorentista” y del creciente interés en tierras por parte de los inversores, si nos fijamos en una serie de datos de los Estados Unidos durante el período 1991 a 2015. El gráfico 1 muestra la diferencia entre un índice de precios de propiedades agrícolas, compilado por una de las principales organizaciones del gremio de bienes raíces y uno de los más importantes índices de la bolsa de valores, el S&P 500. Los porcentajes positivos en el gráfico denotan la ventaja relativa en un año determinado de haber invertido en tierras en vez de acciones. Los valores negativos indican la ventaja relativa de haber invertido en acciones en vez de tierras. Un aspecto interesante que revelan estos datos es que los incentivos para invertir en tierras como una cobertura (*hedge*) empiezan a ser muy fuertes no a partir de la crisis financiera de 2008, que es el punto de partida para casi todos los análisis de *land grabbing*, sino desde el período posterior al fin del auge de los dot.com en 2000 (es interesante reconocer a este respecto que los datos del Land Matrix son de 2000 en adelante [Land Matrix 2016]). En efecto, durante

los años 90, con excepción de 1994, no hubo ninguna ventaja en invertir en tierras en vez de acciones. A partir de 2000, en contraste, la tendencia se torna positiva en la mayoría de los años, con ganancias espectaculares en algunos años y con pérdidas en los años negativos menores de las que hubiera durante los 90.

Gráfico 1

Crecimiento anual precios de tierras agrícolas en EE. UU. menos crecimiento anual del índice Standard & Poor's 500 (acciones)



Fuentes: Precios de tierras - National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF). Recuperado el 12/7/2016 de <http://www.ncreif.org/farmland-returns.aspx>. S&P 500 - NYU Stern School of Business, Annual Returns on Stock, T. Bonds and T. Bills: 1928 - Current, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Nota: El Índice de Tierras Agrícolas NCREIF es una serie de datos trimestrales que mide el rendimiento de la inversión en un gran número de propiedades agrícolas individuales adquiridas en el mercado privado con fines de inversión. Todas las propiedades en el Índice de Tierras Agrícolas NCREIF se han adquirido, al menos en parte, en nombre de inversores institucionales exentos de impuestos, la gran mayoría de ellos fondos de pensiones.

1.7. El acaparamiento para fines no agrícolas

Ya me he referido a la existencia de varios tipos de acaparamiento para fines no agrícolas. La lista es bien conocida e incluye la extracción de maderas, la minería, los recursos energéticos (tanto petróleo

como granjas eólicas), el agua, la especulación, la urbanización, la construcción de parques industriales y otras infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.), la consolidación de cadenas de valor, la protección de zonas ecológicas, el ecoturismo y la inversión en sumideros de carbón u otras fuentes de pagos por servicios ambientales.

Los investigadores que hemos trabajado el tema del acaparamiento de tierras hemos sido un poco agrocéntricos. No es que hayamos desatendido las otras formas de *land grabbing*; al contrario, ya contamos con excelentes estudios de muchas de ellas. Donde sí podríamos profundizar más es, primero, en la investigación de las interrelaciones entre las distintas formas y, segundo, en el peso que cada una tiene en nuestra visión de la situación global. Desde el punto de vista de los inversores las distintas formas de transacciones de tierras a veces se ven como complementarias y otras veces como estrategias alternativas. Creo que tenemos que profundizar más en los factores que influyen en estas distintas estrategias. En Estados Unidos en las últimas décadas, por ejemplo, las grandes inversiones en tierras para explotación maderera han crecido mucho más rápido de lo que han crecido las inversiones en tierras agrícolas (Gunnoe, 2014). Como ya mencioné, en África las concesiones de tierras más grandes también son para explotación forestal (Schoneveld, 2014). En China y en India los conflictos de tierras más agudos frecuentemente versan sobre proyectos de urbanización y de la construcción de parques industriales (Levien, 2013; O'Brien & Li, 2006; Sampat, 2015). El agrocentrismo de los investigadores, a veces, hace que perdamos de vista estos otros procesos significativos los cuales tenemos que tomar más en cuenta.

1.8. Conclusión

Desde luego las inquietudes consideradas aquí no son las únicas que todo investigador tendría que tomar en cuenta. En una carta publicada en un número reciente de la revista *Science*, por ejemplo, titulada “Insufficient research on land grabbing” (“Investigaciones insuficientes sobre el acaparamiento de tierras”), Liao *et al.* (2016) hacen una fuerte crítica a los estudios que se han hecho hasta la fecha y señalan otros tres elementos importantes. Según ellos (1) las bases de datos globales sobre transacciones de tierras subestiman el número

total de transacciones, especialmente en países como Etiopía, Perú y Camboya; (2) es difícil de estimar hasta qué punto las tierras acaparadas están en producción ya que no todas las tierras están siendo utilizadas para agricultura; y (3) los hallazgos reportados en la literatura académica se apoyan en muestras que no son estadísticamente representativas de la gama completa de las condiciones geográficas, las diferencias socioeconómicas y los arreglos contractuales que pueden influir en los desenlaces de distintos intentos de acaparar tierras.

El repaso que he hecho en los apartados anteriores me deja con varios interrogantes y retos, algunos de los cuales ya he enumerado. La conclusión tal vez más importante es que tenemos que aceptar la complejidad de los procesos estudiados como el punto de partida de toda investigación sobre el acaparamiento de tierras. Las simplificaciones en blanco y negro pueden ser contraproducentes, debido a que raras veces sirven para entender lo que realmente está sucediendo o para desarrollar estrategias de lucha exitosas, inclusive en algunos casos logran deslegitimar y desprestigiar a los movimientos por la justicia social (Edelman, 2013a: 488). Los investigadores tenemos que tomar más en cuenta la presencia de la historia en los contextos actuales, las complicadas cuestiones de escala que hemos esbozado, la complejidad de los *drivers* o motores de *land grabbing* y las maneras en que estos han cambiado en los últimos años, el papel insuficientemente estudiado que juegan los actores nacionales, la variedad de reacciones de los grupos subalternos aparte de la resistencia frontal, y las oscuras y sumamente complejas relaciones financieras detrás de las grandes transacciones de tierras. Tenemos que refrenar nuestro agrocentrismo e integrar más el estudio de los acaparamientos para fines agrícolas con las otras variedades de *land grabbing*. Finalmente, los aspectos de género y especialmente de generación han sido desatendidos y merecen más análisis, no tanto por un deseo de balancear diferentes principios de identidad, sino más bien porque son dinámicas que en muchos casos manifiestamente afectan los desenlaces de las luchas por la tierra.

Reconozco que esta agenda de trabajo se constituye en un reto. Pero no existe otra alternativa que asumirla y seguir adelante.